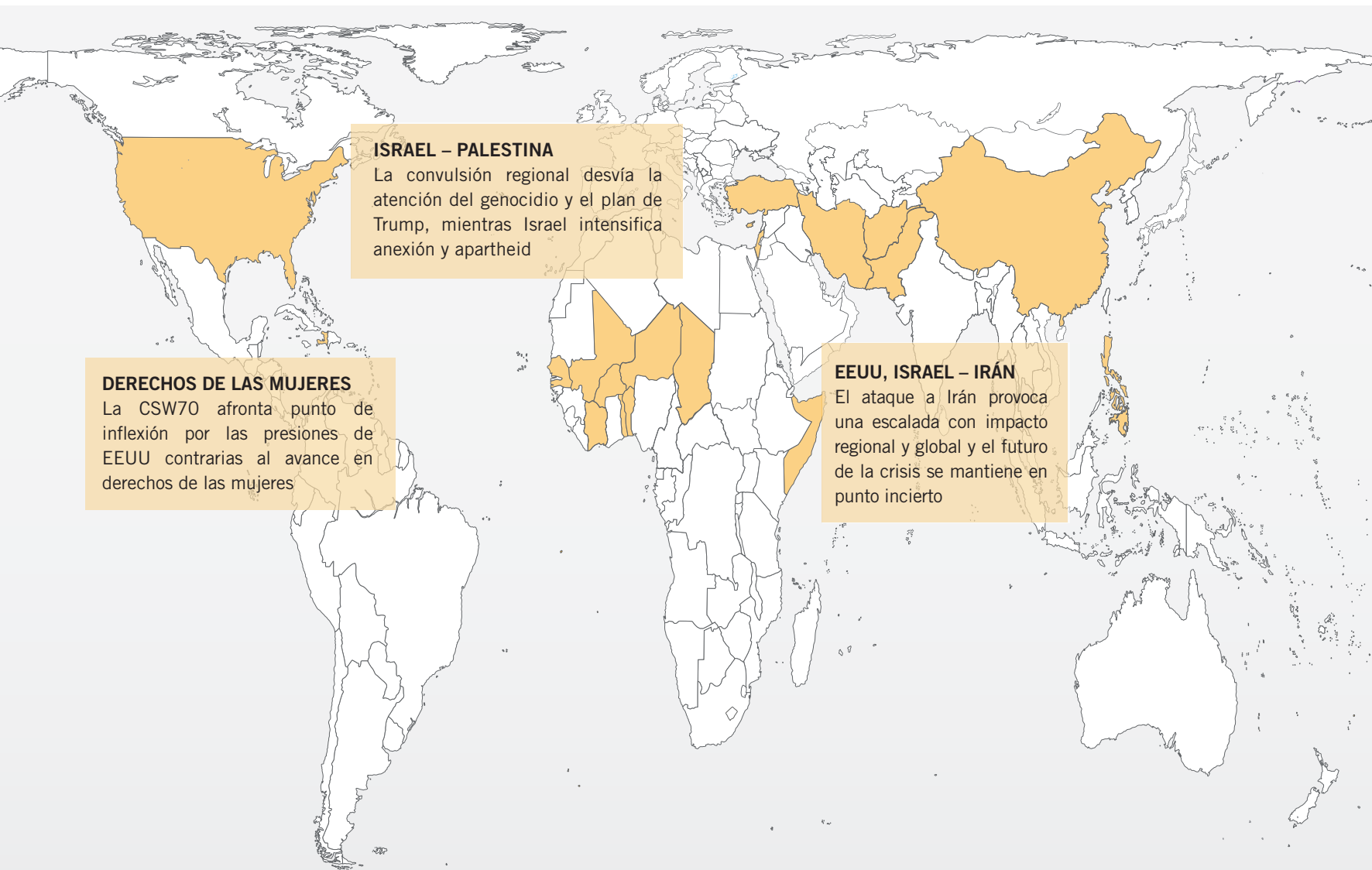


Escenarios de riesgo y oportunidades de paz

Abril de 2026

ecp escola de cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona



ISRAEL – PALESTINA

La convulsión regional desvía la atención del genocidio y el plan de Trump, mientras Israel intensifica anexión y apartheid

DERECHOS DE LAS MUJERES

La CSW70 afronta punto de inflexión por las presiones de EEUU contrarias al avance en derechos de las mujeres

EEUU, ISRAEL – IRÁN

El ataque a Irán provoca una escalada con impacto regional y global y el futuro de la crisis se mantiene en punto incierto

Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

Burkina Faso
Chad
Níger
Sahel Occidental
Senegal
Somalia

AMÉRICA

Haití

ASIA Y EL PACÍFICO

China – Filipinas
Filipinas
Pakistán – Afganistán

EUROPA

Chipre
Türkiye (PKK)

Con el apoyo de:

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya

• *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz* es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Este número abarca el periodo entre enero de 2026 y el 10 de abril de 2026.

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número abarca el periodo entre enero de 2026 y el 10 de abril de 2026.

Casos destacados:

EEUU, ISRAEL – IRÁN: El ataque a Irán provoca una escalada con impacto regional y global y el futuro de la crisis se mantiene en punto incierto

ISRAEL – PALESTINA: La convulsión regional desvía la atención del genocidio y el plan de Trump, mientras Israel intensifica anexión y apartheid

DERECHOS DE LAS MUJERES: La CSW70 afronta punto de inflexión por las presiones de EEUU contrarias al avance en derechos de las mujeres

Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

BURKINA FASO: Se consolida el poder de la Junta Militar en el país

CHAD: Insurgencia interna y riesgo de contagio del conflicto sudanés

NÍGER: Se intensifica el conflicto armado y las movilizaciones en apoyo al régimen militar

SAHEL OCCIDENTAL: HRW denuncia crímenes de guerra y lesa humanidad por todos los actores en conflicto en Burkina Faso

SENEGAL: La Asamblea Nacional aprueba un endurecimiento de la legislación contra la población LGTBIQ+

SOMALIA: Se agrava la situación por la convergencia de la crisis política, la emergencia humanitaria y la creciente violencia

AMÉRICA

HAITÍ: Decenas de actores políticos y sociales firman un pacto nacional para celebrar elecciones en la segunda mitad de 2026, las primeras en una década

ASIA Y EL PACÍFICO

CHINA – FILIPINAS: Se reanudan las negociaciones para la reducción de las tensiones en el Mar de la China Meridional

FILIPINAS: Tras retrasos desde 2022, las primeras elecciones en la Región de Bangsamoro desde el acuerdo de paz de 2014 se realizarán en septiembre de 2026

PAKISTÁN – AFGANISTÁN: Ambos países acuerdan en China dialogar para una solución global al conflicto tras una escalada de la violencia sin precedentes

EUROPA

CHIPRE: Nuevos contactos entre los líderes grecochipriota y turcochipriota

TÜRKIYE (PKK): El proceso de paz avanza con dificultades, demandas de más concreción y un contexto inestable



Barrio de Bashura en Beirut, Líbano, después de un ataque israelí. Fuente: UNHCR

EEUU, ISRAEL – IRÁN

El ataque a Irán provoca una escalada con impacto regional y global y el futuro de la crisis se mantiene en punto incierto

El ataque concertado de EEUU e Israel contra Irán iniciado el 28 de febrero abrió un nuevo capítulo de confrontación e inestabilidad en Oriente Medio con profundas repercusiones regionales y consecuencias globales. La ofensiva masiva israelo-estadounidense consiguió rápidamente decapitar al régimen clerical, con la muerte en un bombardeo de su máximo líder, el ayatollah Ali Khameni y otros altos cargos políticos y militares iraníes. La respuesta de Teherán se ha centrado en atacar a Israel y las bases militares y sedes diplomáticas de EEUU en varios países de la región, incluyendo Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Diversos episodios de las hostilidades también han acabado afectando o involucrando a actores de países como Iraq, Jordania, Türkiye, Chipre, Azerbaiyán o Yemen, aunque el segundo frente más activo del conflicto armado se abrió en Líbano. El lanzamiento de cohetes hacia Israel por parte de Hezbollah fue utilizado como argumento por el Gobierno de Netanyahu para iniciar una renovada e intensa ofensiva contra el conjunto del territorio libanés. En un período de cinco semanas, la confrontación se había extendido **hasta alcanzar un total de 14 países y había provocado la muerte a más de 5.000 personas, principalmente en Irán (3.000) y Líbano (2.000)** además de otras severas repercusiones en civiles, como desplazamientos masivos de población. Los impactos

de la crisis también han tenido una dimensión mundial, principalmente a nivel económico por las consecuencias del conflicto en los precios del petróleo y del gas, escenificada en la disputa por el control del estrecho de Ormuz por su valor estratégico para el comercio marítimo y el flujo de hidrocarburos. A continuación, se perfilan algunas claves para valorar antecedentes y el alcance de la crisis, así como sus perspectivas de futuro en un escenario incierto.

Ilegalidad de ofensiva y objetivos cambiantes

El ataque de EEUU e Israel contra la república islámica había estado precedido por la llamada “guerra de 12 días” en junio de 2025 y por nuevas amenazas de Trump contra Teherán a principios de 2026, en un escenario marcado por nuevas **protestas populares masivas contra el régimen teocrático duramente reprimidas por las autoridades iraníes –las estimaciones apuntan a entre 5.000 y hasta 20.000 víctimas mortales.** Entonces, el presidente estadounidense advirtió con una posible intervención y aseguró a los manifestantes iraníes que la ayuda de Washington “estaba en camino”. Aunque Trump rebajó el tono en los días siguientes, EEUU intensificó el envío de fuerzas a la región e inició un nuevo diálogo con

Irán sobre su programa nuclear. A finales de febrero las informaciones apuntaban a que Teherán había accedido a concesiones relevantes e incluso sin precedentes en lo relativo a su programa atómico –no así en lo referente a su programa de misiles balísticos–, pero aun así fue en ese contexto en el que se produjo la nueva ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra Irán.

La operación –bautizada por Washington como “Furia Épica” y por Israel como “León Rugiente”– fue ampliamente cuestionada a nivel internacional, entre otros aspectos por su falta de legalidad. La ofensiva no contó con la aprobación del Congreso estadounidense ni del Consejo de Seguridad de la ONU, ni se atiene a los limitados supuestos para el uso de la fuerza en el sistema internacional establecidos por la Carta de Naciones Unidas. Diversas voces expertas han subrayado que la ofensiva no puede calificarse como un ataque preventivo ya que se había bombardeado a un país que no se disponía a atacar. Incluso algunos altos funcionarios de la Administración Trump renunciaron a sus cargos con posterioridad reconociendo que no podía argüirse una amenaza inminente por parte del régimen iraní para justificar la ofensiva. **La acción motivó comparativas con la invasión unilateral e ilegal de EEUU a Iraq en 2003**, para enfatizar que en aquel entonces el Gobierno de George W. Bush había intentado buscar el amparo de la ONU –con argumentos que se demostraron falsos–, un ejercicio diplomático que la Administración Trump ni siquiera intentó en el marco de una política exterior que se ha habituado a ignorar y/o vulnerar normas del derecho internacional y envalentonada, además, por la experiencia del rápido derrocamiento de Maduro en Venezuela.

Desde el inicio de la ofensiva, la Administración Trump ha ofrecido fluctuantes explicaciones sobre la razón para emprender el ataque contra Irán y sobre cuáles son los objetivos de la intervención. Una de ellas ha sido la intención de evitar que el régimen clerical obtuviera armas atómicas, un objetivo que en parte se contradice con declaraciones previas del propio presidente estadounidense, quien a mediados de 2025 había anunciado con triunfalismo que sus operaciones contra el régimen habían “obliterado completamente” sus capacidades atómicas. Según trascendió, la propia CIA habría valorado que la capacidad de militarización del programa nuclear iraní aún estaba lejos de obtener resultados. El objetivo de cambio de régimen en Irán también ha sido ampliamente señalado por EEUU y por Israel.

Tras cinco semanas de hostilidades, la campaña militar ha infligido severos daños al país y a su cúpula dirigente, pero el régimen no puede considerarse derrotado y ha demostrado disposición y capacidades para amplificar el conflicto, tomar medidas con repercusiones globales

–como el cierre del estrecho de Ormuz– y continuar lanzando ataques. Diversos análisis han subrayado que **uno de los errores de la Administración Trump ha sido ignorar o subestimar la capacidad de resiliencia del régimen iraní y sus mecanismos de organización para mantener funcionando el sistema**, a pesar de los ataques desde el exterior y de la contestación popular interna. La eliminación selectiva de altos cargos no solo **no ha conseguido hasta ahora acabar con el régimen sino que estaría reforzando aún más el control del sistema por parte del aparato militar**. Análisis también apuntar a que si la república islámica sobrevive al conflicto armado, seguramente perseguirá con más fuerza un arma nuclear como elemento disuasorio.

La variabilidad de objetivos –y de plazos y ultimátum– expuestos por Washington no solo ha dado cuenta de los vaivenes de la política exterior de EEUU, que sigue el pulso del presidente. También ha dificultado identificar cuáles son los términos para negociar y/o para proclamar una victoria. Adicionalmente, ha alimentado los análisis y reflexiones sobre los propósitos no declarados de la ofensiva. Entre ellos, desviar la atención de asuntos de política interna –el caso Epstein y los excesos del ICE en lo que se refiere a Trump y los casos de corrupción en lo relativo a Netanyahu–, **avanzar en las ambiciones de expansión y hegemonía regional, y asegurar el control de recursos naturales y rutas de transporte que contengan el crecimiento de China**. Esto último, teniendo en cuenta –entre otras cosas– que Irán es un destacado proveedor de petróleo de Beijing.

Incertidumbre negociadora

Tras semanas de enfrentamientos, el 8 de abril se anunció un alto el fuego que, en principio, se extendería por dos semanas y debía ofrecer un margen para negociaciones políticas. El anuncio de tregua estuvo precedido de un nuevo ultimátum de Trump y de graves amenazas de eliminar una civilización entera –la persa–, en unas declaraciones que alentaron las especulaciones sobre la posible disposición del Gobierno estadounidense para utilizar armas nucleares contra Irán. Desde entonces no se ha concretado un alto el fuego como tal, sino una reducción relativa en las hostilidades. Israel, de hecho, evidenció su intención de socavar una posible tregua intensificando sus ataques contra Líbano –causando la muerte a más de 300 personas en un solo día– e insistiendo en que el escenario libanés estaba fuera de la negociación. Las acciones israelíes sirvieron de justificación a Teherán para continuar ataques. El Gobierno de Netanyahu se vio forzado a aceptar un diálogo con el Gobierno libanés bajo presión de EEUU, pero no ha cesado en sus ataques contra Líbano, que en las últimas semanas han incluido una incursión terrestre, la destrucción masiva de infraestructuras en el

Uno de los errores de Trump ha sido ignorar o subestimar la capacidad de resiliencia del régimen iraní y sus mecanismos de organización para mantener funcionando el sistema

sur de Líbano y han causado el desplazamiento forzado de más de un millón de personas. Medidas que han multiplicado las alertas por la reedición de estrategias y tácticas utilizadas en Gaza y por la evidente ambición del Gobierno israelí de ampliar la ocupación y control de territorios en el sur de Líbano.

En este escenario, el fin de semana del 11 y 12 de abril se llevaron a cabo negociaciones entre altos representantes de EEUU e Irán con la mediación de Pakistán. La cita en Islamabad estuvo precedida de especulaciones y tensiones hasta último momento por las diferencias entre las partes sobre el punto de partida de las conversaciones, después de que la Administración Trump aparentemente aceptara –y luego desconociera– una serie de 10 puntos definidos por Irán para comprometerse con el alto el fuego que incluía un eventual control iraní del Estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones y reparaciones. EEUU insistió entonces en defender una propuesta de 15 puntos (que no se conoce en detalle) y que Irán había descartado previamente tras considerarla una agenda maximalista por incluir, entre otras cosas, exigencias relativas a la renuncia al enriquecimiento de uranio, la eliminación de su programa de misiles y el fin del apoyo a sus aliados regionales. Las partes llegaron así a las conversaciones con demandas altamente incompatibles. Contra todo pronóstico, las negociaciones de alto nivel fueron directas –se esperaba que fueran indirectas, en formato de “shuttle

diplomacy”– y tras 21 horas de conversaciones fueron interrumpidas. EEUU informó que su país abandonaba el diálogo porque Teherán no había aceptado las condiciones definidas por la Casa Blanca. Irán insistió que el fracaso a la hora de alcanzar un acuerdo se debía a las demandas irracionales de Washington. Pese a estas valoraciones, **se ha interpretado que las negociaciones estaban suspendidas, pero no rotas**. En medio de los interrogantes sobre el futuro del diálogo, y en un nuevo giro imprevisible de Trump, el mandatario anunció que su país impondría un bloqueo al estrecho de Ormuz y se mostró indiferente al curso de las negociaciones. Este nuevo capítulo volvía a situar a Ormuz –un paso que se mantenía abierto al flujo marítimo antes de esta crisis– como uno de los escenarios clave de la disputa que continuará teniendo repercusiones en el mercado energético global. Mientras, diversos análisis insistían en subrayar las complejidades de predecir el curso de los acontecimientos y del futuro de las negociaciones teniendo en cuenta que EEUU no parece tener una estrategia de salida al conflicto, que Irán se mueve en una lógica de supervivencia y que el Israel de Netanyahu continúa interesado en alimentar el ciclo bélico. Sea cual sea la evolución de hechos en las próximas semanas, parece evidente que las partes continuarán intentando presentar cualquier pacto desde una narrativa de ganador y que en la actualidad el escenario regional es infinitamente peor, más caótico e inestable, que hace cinco semanas, subrayando –una vez más– la **inutilidad de la guerra**.



Gaza afectada por lluvias en marzo de 2026. Fuente: UNRWA

ISRAEL – PALESTINA

La convulsión regional desvía la atención del genocidio y el plan de Trump, mientras Israel intensifica anexión y apartheid

La escalada de violencia en la región tras el ataque de Israel y EEUU contra Irán a finales de febrero y la consiguiente respuesta militar de Teherán afectó a las dinámicas en Palestina y añadió incertezas al proceso iniciado en octubre de 2025, tras el anuncio del plan de Trump para Gaza. Las hostilidades (véase el análisis sobre Israel, EEUU – Irán en este informe) desviaron la atención internacional de los vaivenes en la implementación del plan de Washington, que continuó caracterizándose por un sinnúmero de interrogantes y zonas grises. Tras dar por finalizada la primera fase –que estableció un cese el fuego, el retorno de todas las personas cautivas por parte de Hamas, la liberación de personas prisioneras por Israel, el repliegue parcial de fuerzas israelíes de la Franja y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza–, en enero de 2026 se anunció la puesta en marcha de la segunda fase que, en teoría, debía estar centrada en el desarme y la reconstrucción de Gaza. El supuesto alto el fuego, sin embargo, está lejos de ser efectivo por los incumplimientos de Israel y la entrada de ayuda humanitaria continúa siendo extremadamente insuficiente para una población sometida a extraordinarios niveles de violencia y precariedad.

Junta de Trump: lógica empresarial y ambición global

Un hito clave en esta nueva fase fue la formación de la anunciada “Junta de Paz” (*Board of Peace, BoP* por sus siglas en inglés), encabezada por el propio presidente de EEUU, Donald Trump, y que –según la iniciativa de 20 puntos anunciada por Washington en octubre– tenía la potestad y misión principal de supervisar todos los aspectos del plan para Gaza, incluyendo la reconstrucción y la labor de un gobierno interino tecnocrático integrado por personas expertas palestinas. Tras meses de especulaciones sobre cuál sería la composición y el alcance de la Junta, su formalización evidenció las ambiciones del Gobierno de Trump. Tras el anuncio oficial de la Junta en una ceremonia a finales de enero en los márgenes del Foro de Davos y la primera reunión del organismo en Washington en febrero, quedó patente que la pretensión de Washington es conformar una especie de ente alternativo a Naciones Unidas. La carta fundacional de la Junta, de hecho, no hace referencia a Gaza y establece un propósito más expansivo y global de acción que buscaría “consagrar la estabilidad y la paz en áreas afectadas o amenazadas por conflictos”. En una velada pero explícita alusión a la

ONU, también se hace referencia a “instituciones que menudo han fallado” y apuesta por la conformación de un organismo de construcción de paz más ágil y efectivo. Los Estados miembros de la Junta acceden por invitación del propio Trump y se comprometen a desembolsar 1.000 millones de dólares al fondo del organismo. Trump se erige además como presidente vitalicio de la entidad, con extraordinarios poderes que le permiten, entre otras cosas, vetar iniciativas, resolver disputas o expulsar a Estados miembros o a personas de los organismos asociados a la Junta. La Junta incluye un Consejo de Administración, un Consejo Ejecutivo y una Junta Ejecutiva para Gaza, en los que destaca la presencia de personas vinculadas a la administración estadounidense, como el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, su yerno, Jared Kushner; y otras afines al mandatario, incluyendo ejecutivos de firmas de inversión, empresarios y multimillonarios. La Junta se instauró con la presencia de 28 Gobiernos, entre ellos Israel y otros países ideológicamente afines a Trump, como Argentina. A nivel europeo, solo se sumaron Hungría y Bulgaria, aunque otros países –República Checa, Chipre, Grecia, Italia y Rumanía– y la propia UE se unieron a este espacio como observadores.

Tras desvelarse los detalles de la iniciativa, numerosos análisis subrayaron que la Junta representa una amenaza para la paz en Palestina y a nivel mundial. Desde una perspectiva de derechos humanos, Amnistía Internacional enfatizó que este nuevo órgano no solo corría el riesgo de consolidar la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino, sino que también **pretendía erigirse en una estructura global paralela** dominada por intereses políticos y económicos. Voces expertas subrayaron que la Junta de Trump buscaba, sobre todo, **instaurar un nuevo orden mundial de carácter transaccional** y reflejaba la intención del gobernante estadounidense de afirmar su control sobre los asuntos globales. Aunque el plan de Trump fue validado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la resolución 2803 el pasado noviembre (véase la anterior edición de *Escenarios de riesgo y Oportunidades de paz*), múltiples críticas continuaron cuestionando la legalidad de la iniciativa. Entre otras cosas, se ha subrayado que, aunque la Junta de Trump estaba concebida como un ente transitorio con mandato hasta finales de 2027 (según la resolución de la ONU), su estatuto establece que la Junta se disolverá cuando lo desee su presidente. Los cuestionamientos también han apuntado a las **lógicas empresariales del mecanismo, su composición altamente masculinizada** y a la manera en que ha desviado el foco de la rendición de cuentas de Israel por sus responsabilidades en el genocidio, crímenes de guerra y en la reconstrucción de Gaza. Una reconstrucción de la Franja que la ONU estima en 70.000 millones de dólares y que la Junta –en voz del yerno de Trump, Jared Kushner– volvió a perfilar eminentemente como un futuro resort turístico. El organismo tecnocrático palestino supuestamente encargado de los asuntos de Gaza según

El Parlamento israelí aprobó una ley que expande el uso de la pena de muerte y que, de facto, se aplicará exclusivamente a población palestina

el plan de Trump –**el Comité Nacional Palestino para la Administración de Gaza (NCAG)**– se conformó a principios de año, con 15 integrantes –**una sola mujer entre ellos**–, liderados por Ali Shaath. El comité se ubica en el último lugar de la jerarquía, con mínima capacidad de influencia y agencia, al punto que Israel ni siquiera había permitido a sus miembros acceder a la Franja.

Respecto a la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), que estará liderada por el general estadounidense Jasper Jeffers, aún persistían incontables dudas sobre su mandato, alcance y rendición de cuentas, así como su eventual papel en el desarme de Hamas y otros grupos palestinos de Gaza. Cinco gobiernos –Albania, Indonesia, Kazajstán, Kosovo y Marruecos– han comprometido tropas para la ISF, que según se anunció estará compuesta por 12.000 efectivos policiales y unos 20.000 soldados que se desplegarán en Gaza, inicialmente en Rafah, en una fecha aún indeterminada. De hecho, en marzo trascendió que Indonesia –que había comprometido el mayor número de fuerzas, 8.000 efectivos– había suspendido temporalmente su participación debido a la crítica escalada en Oriente Medio tras los ataques de EEUU e Israel a Irán. En cuanto al desarme de Hamas, el representante de la Junta de Trump para Gaza, Nickolay Mladenov, informó al Consejo de Seguridad de la ONU de la propuesta presentada al grupo palestino. El plan –al que Hamas aún no había respondido al cierre de esta edición– estaría basado en cinco principios: reciprocidad en la entrega de arsenales y el repliegue gradual de Gaza, el desmantelamiento de armas pesadas antes que las ligeras, verificación del cumplimiento como condición para la reconstrucción, programas de reintegración y amnistía para integrantes de Hamas y posibilidades de ampliar el calendario de implementación si las partes demostraban buena fe en sus esfuerzos.

Violencia persistente, ansiedad y pena de muerte

En este contexto, la situación en Gaza continuaba siendo crítica. **Seis meses después de la declaración formal de alto el fuego, Israel persistía en sus periódicos ataques en la Franja, que habían causado la muerte de 738 palestinos** (hasta el 10 de abril de 2026). Muchas de estas personas han muerto en ataques israelíes por situarse en las proximidades de la llamada “línea amarilla” que, tras un repliegue parcial, delimita las áreas de Gaza que continúan bajo control del Gobierno de Netanyahu, equivalentes a más del 50% del territorio de la Franja. En paralelo, persistían las restricciones de acceso a la ayuda humanitaria. Tras la reapertura parcial del paso de Rafah en enero, a finales de febrero Israel volvió a cerrar el cruce después del ataque del Gobierno de Netanyahu y de Trump a Irán y al cierre de esta edición restringía su uso solo para un limitado retorno de población refugiada y evacuación de personas enfermas o heridas. Solo había un paso –el de Kerem Shalom, en el sur de la Franja– operativo para

la entrada limitada de asistencia humanitaria y bienes. La situación humanitaria en Gaza también se ha visto afectada por las nuevas regulaciones impuestas por Israel a las ONG internacionales que operaban en la Franja y que han restringido las operaciones de al menos 37 entidades que realizaban una labor clave de asistencia a la población palestina. Las repercusiones estaban siendo notorias, una vez más, en las mujeres y niñas palestinas, entre otros aspectos en su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Personas expertas de la ONU subrayaron también que el bloqueo de la ayuda humanitaria expone a las mujeres y las niñas a mayores cargas de cuidados y a estrategias negativas de afrontamiento, a menudo a expensas de su salud y bienestar, problemáticas que se han acentuado en el contexto de genocidio.

Paralelamente, en Cisjordania, Israel también intensificó sus políticas de anexión y apartheid y se agudizó la violencia de colonos israelíes contra población palestina. En marzo, OCHA advirtió que el promedio mensual de ataques de colonos se ha incrementado significativamente –de 30 en 2024 y 69 en 2025 a 105 en 2026– y que la cifra de población palestina desplazada por esta violencia en el primer trimestre de 2026 –casi 1.700 personas– superó ya la de todo el año anterior. Durante los primeros meses de 2026 el Gobierno israelí también adoptó medidas para acelerar la actividad colonizadora en Cisjordania a través de la aprobación de medidas para profundizar el control administrativo del territorio (en las áreas A y B) y facilitar la expropiación de tierras palestinas (en el área C). Por ejemplo, a través de la imposición de condiciones prácticamente imposibles de cumplir por palestinos y palestinas para demostrar la propiedad

sobre sus tierras, en un ejercicio que ONG de derechos humanos denunciaron como un intento de desposesión masiva y anexión. Al anunciar algunas de estas medidas altos cargos del Gobierno israelí insistieron en que la intención era “enterrar la idea de un Estado palestino”. En este escenario, el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre los asentamientos ilegales israelíes alertó que el Gobierno de Netanyahu estaba adoptando medidas coordinadas para consolidar la anexión de amplias áreas del territorio palestino.

A finales de marzo, una nueva medida aprobada por las autoridades israelíes causó especial consternación y condena. La Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que expande el uso de la pena de muerte y que, de facto, se aplicará exclusivamente a población palestina. En el sistema judicial civil de Israel, la norma establece la pena de muerte a culpables de asesinato de una persona con la intención de “negar la existencia del Estado de Israel”. En el sistema militar que se aplica en el Territorio Ocupado Palestino exclusivamente a población palestina, la ley impone la pena de muerte para asesinatos clasificados como actos de terrorismo, solo permite a los tribunales aplicar la cadena perpetua en casos excepcionales y exige que las ejecuciones se realicen en un plazo de 90 días. Diversos Gobiernos y ONG de derechos humanos, entre otras voces, subrayaron que la medida consagra un sistema de discriminación y apartheid. La ONG B’Tselem ha recordado que los juicios militares contra palestinos tienen una tasa de condena de aproximadamente el 96% y que buena parte de ellos están basados en confesiones obtenidas bajo coacción y torturas.



Sesión de cierre de la CSW70. Fuente: ONU Mujeres

DERECHOS DE LAS MUJERES

La CSW70 afronta punto de inflexión por las presiones de EEUU contrarias al avance en derechos de las mujeres

En marzo de 2026 se celebró la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), órgano internacional de Naciones Unidas cuyo mandato es la promoción de la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres. En un contexto internacional de retroceso generalizado en el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, así como de avance de Gobiernos y fuerzas políticas contrarias a la igualdad de género, la celebración de la CSW70 estuvo marcada por las tensiones gubernamentales y la presión por parte de la sociedad civil para el mantenimiento y protección de los avances en igualdad de las últimas décadas. Además, el contexto internacional se caracterizaba por una fuerte militarización y belicismo, así como por graves tensiones geopolíticas tras la decisión de EEUU de atacar Irán con bombardeos aéreos que se produjeron desde el 28 de febrero en alianza con el Gobierno de Israel. El tema prioritario de la CSW70 fue “Garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas” y también se abordó “La participación y toma de decisiones plena y efectiva de las mujeres en la vida pública, y la eliminación de la violencia” como tema complementario. Por primera vez en la historia de esta Comisión, las conclusiones acordadas, documento resultado del trabajo anual de la CSW, fueron sometidas a votación ante la

falta de consenso debido a la negativa del Gobierno de EEUU a dar apoyo. Las conclusiones recibieron el apoyo de 37 de los 45 miembros de la comisión y seis Estados se abstuvieron: Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Egipto, Malí, Mauritania y Arabia Saudí. Las objeciones que presentó el Gobierno de EEUU señalaban el uso “lenguaje ambiguo que promueve la ideología de género”, “compromisos vagos e incondicionales con la salud sexual y reproductiva que pueden interpretarse como implicación de derechos al aborto” y “lenguaje de censura sobre la regulación de la inteligencia artificial”. Tanto la sociedad civil, como diferentes gobiernos, expresaron su grave preocupación por la votación sin precedentes y el intento de sabotear el resultado final de la CSW70, así como por los argumentos esgrimidos por la Administración Trump cuestionando los derechos de las mujeres, particularmente los sexuales y reproductivos. No obstante, el hecho de que la votación saliera adelante con una amplia mayoría de votos a favor puso en evidencia que, si bien la posición de retroceso es defendida por actores poderosos de la comunidad internacional, no es una posición mayoritaria. En paralelo, un grupo de Estados emitió una declaración de compromiso con la igualdad de género, la autonomía corporal y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Cabe destacar que entre las propuestas presentadas por el Gobierno

de EEUU había un **borrador de resolución** en la que se buscaba redefinir el significado de “género” como “hombres y mujeres”. Bélgica bloqueó la votación sobre esta resolución presentando en nombre de la UE una moción de no acción, un recurso excepcional en el sistema de Naciones Unidas, que impide el debate y la votación. El país europeo señaló que no se podía debatir sobre un concepto, el género, sobre el que hay más de 30 años de consenso y avances.

Restricciones a la participación de delegaciones de mujeres

Diferentes **organizaciones de mujeres expresaron también su denuncia** con respecto al hecho de que la CSW continuara teniendo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, dadas las restricciones a la entrada al país impuestas por el Gobierno de EEUU contra más de 40 países, incluyendo Afganistán, Burkina Faso, Haití, Libia, Níger, Palestina, Siria y Yemen, lo que impidió que representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y constructoras de paz de zonas especialmente afectadas por los conflictos armados y la violencia pudieran participar en la sesión y presentar sus denuncias y propuestas en el foro internacional. Especialmente notoria fue la exclusión de las delegaciones de mujeres de diferentes países de Oriente Medio, seriamente afectadas por la grave escalada de violencia a nivel internacional propiciada por EEUU. Las dificultades en la CSW se sumaban a las que tuvieron lugar durante la celebración en octubre de 2025 del 25º aniversario de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, que también se vio empañado por el contexto

geopolítico y por los obstáculos impuestos por el Gobierno de Rusia, que presidía el Consejo de Seguridad en ese momento, dificultando la participación de la sociedad civil en el aniversario.

A esto se une la propuesta de fusión entre ONU Mujeres y UNFPA, organismos de Naciones Unidas con mandatos relativos a la igualdad de género y los derechos de las mujeres, en el primer caso y dinámicas de población y derechos sexuales y reproductivos en el segundo caso, en un contexto de importantes recortes de fondos y debilitamiento de Naciones Unidas y del sistema multilateral internacional. La sociedad civil expresó su preocupación por el hecho de que esta fusión pueda implicar tanto una reducción en los fondos destinados a los mandatos de ambas entidades, como a un debilitamiento de los propios mandatos.

El Gobierno de EEUU no logra imponer su intento de retroceso en el reconocimiento de derechos en la CSW

En un contexto internacionalmente desfavorable para la agenda feminista de igualdad de género y avance de los derechos de las mujeres, la CSW ha servido para poner de manifiesto que una mayoría de actores de la comunidad internacional continúa teniendo entre sus prioridades la defensa de esa agenda, pero que los obstáculos son cada vez mayores. Por su parte, la sociedad civil ha puesto en el centro de las reivindicaciones la exigencia de mayores compromisos a los Gobiernos para que no se produzcan retrocesos, incluyendo especialmente en lo que se refiere a las agendas de paz y seguridad y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en grave riesgo ante la creciente conflictividad armada y militarismo y avance de las agendas conservadoras contrarias al derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres.

ÁFRICA

BURKINA FASO: Se consolida el poder de la Junta Militar en el país

CHAD: Insurgencia interna y riesgo de contagio del conflicto sudanés

NÍGER: Se intensifica el conflicto armado y las movilizaciones en apoyo al régimen militar

SAHEL OCCIDENTAL: HRW denuncia crímenes de guerra y lesa humanidad por todos los actores en conflicto en Burkina Faso

SENEGAL: La Asamblea Nacional aprueba un endurecimiento de la legislación contra la población LGTBIQ+

SOMALIA: Se agrava la situación por la convergencia de la crisis política, la emergencia humanitaria y la creciente violencia

BURKINA FASO

Se consolida el poder de la Junta Militar en el país

Durante el primer trimestre del año la Junta Militar, encabezada por el capitán Ibrahim Traoré, consolidó de forma acelerada su control sobre Burkina Faso, eliminando progresivamente cualquier vestigio de institucionalidad democrática. En enero, las autoridades informaron de que habían frustrado un supuesto golpe de Estado atribuido al expresidente Paul-Henri Damiba, quien fue extraditado desde Togo y arrestado. Traoré aprovechó la coyuntura para reorganizar su gabinete, recompensar a las personas leales y elevar el estatus de la milicia civil pro-gobierno –los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP)– al rango de cuerpo/organismo dentro del Ejército, **pese a sus documentados abusos contra civiles**. Asimismo, el 29 de enero la Junta emitió un decreto disolviendo todos los partidos políticos, cuyas actividades habían estado suspendidas desde 2022. Posteriormente, en febrero, la Asamblea Legislativa de Transición ratificó el decreto y disolvió por unanimidad todos los partidos políticos, derogando además la legislación electoral. En marzo, el país adoptó una nueva **“Carta de la Revolución”** que eliminó toda referencia a una transición política, así como los escaños de los partidos políticos y consagró institucionalmente la gobernanza militar bajo la denominada “Revolución Progresista y Popular”. El propio Traoré declaró públicamente que el pueblo burkinés debía **“olvidarse de la democracia”**, descartando cualquier proceso electoral. La transición democrática que debía concluir en julio de 2024 fue prorrogada cinco años, hasta 2029, mientras el país sigue sumido en una grave crisis de seguridad por la violencia yihadista que se prolonga desde hace casi una década.

CHAD

Insurgencia interna y riesgo de contagio del conflicto sudanés

Durante los primeros meses de 2026, Chad ha experimentado un deterioro significativo de la seguridad, marcado tanto por acciones de violencia insurgente interna como por una escalada de tensiones con Sudán,

cuyo conflicto civil se ha desbordado de forma creciente hacia territorio chadiano. Esta doble presión está poniendo a prueba la capacidad del Estado para controlar su territorio y mantener la estabilidad en un contexto regional altamente volátil.

En el plano interno, el Ejército chadiano ha intensificado sus operaciones contra grupos rebeldes activos principalmente en el sur del país. En enero, las Fuerzas Armadas se enfrentaron al **Movimiento para la Paz, la Reconstrucción y el Desarrollo (MPRD)** en la localidad de Korbol, tras el vencimiento de un ultimátum que exigía a los insurgentes deponer las armas. Los combates causaron víctimas en ambos bandos y evidenciaron la persistencia de movimientos rebeldes que buscan un cambio de poder por la vía armada. El MPRD, fundado en 2003, mantiene como objetivo explícito el derrocamiento del régimen actual.

Paralelamente, el Ejército lanzó ofensivas contra otros grupos, como **el FRAPE, en el sur del país**. Estas operaciones estuvieron acompañadas de acusaciones de abusos contra la población civil, incluyendo la quema de aldeas y la muerte de civiles, lo que incrementa el riesgo de resentimiento local y de nuevos ciclos de violencia. Además, se registraron episodios de inseguridad en zonas rurales y enfrentamientos intercomunitarios vinculados al acceso a recursos, así como ataques atribuidos a Boko Haram en la región del Lago Chad.

La dimensión más grave de la crisis de seguridad que padece Chad proviene del conflicto en Sudán, que desde principios de año se ha proyectado con mayor intensidad sobre el este de Chad. Combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) sudanesas han llevado a cabo incursiones transfronterizas en la zona de Tine, causando la muerte de soldados chadianos y civiles en enero y febrero. Estas acciones llevaron al Gobierno de N'Djamena **a cerrar la frontera oriental en febrero y a desplegar refuerzos militares** para contener el contagio del conflicto.

La **escalada alcanzó un nuevo nivel en marzo**, cuando un ataque con drones lanzado desde Sudán impactó en Tine durante un funeral, matando a al menos 17 civiles, incluidos menores. Aunque la autoría no fue claramente establecida, el Gobierno chadiano atribuyó el ataque a actores del conflicto sudanés y ordenó represalias

inmediatas ante cualquier nueva agresión, dejando abierta la posibilidad de operaciones militares en territorio sudanés. Este episodio elevó significativamente el riesgo de una implicación directa de Chad en la guerra de Sudán. El deterioro de la seguridad ha tenido repercusiones políticas internas, como la dimisión de figuras clave vinculadas a antiguas rebeliones, como es el caso de **Tom Erdimi, ministro de Educación Superior**, y el aumento de tensiones étnicas, en particular dentro de la comunidad zaghawa, dividida por lealtades transfronterizas. Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron a reubicar y restringir la entrada de personas refugiadas sudanesas, lo que amenaza con agravar una ya crítica situación humanitaria en el este del país.

NÍGER

Se intensifica el conflicto armado y las movilizaciones en apoyo al régimen militar

La situación en el país durante el primer trimestre del año se ha caracterizado por una intensificación del conflicto armado, una militarización creciente del Estado y un aumento de las movilizaciones populares en apoyo al régimen militar y en rechazo a las presiones internacionales. Este contexto se inscribe en una reconfiguración regional más amplia tras la consolidación de la **Alianza de Estados del Sahel (AES)**, integrada por Níger, Malí y Burkina Faso, y su progresivo distanciamiento de socios occidentales. Níger atraviesa uno de los periodos más violentos de los últimos años. Durante la última década, han muerto alrededor de 2.000 civiles, según ACLED. Grupos de corte yihadista, en particular la Provincia del Estado Islámico en el Sahel (ISSahel) y el grupo afiliado a al-Qaeda JNIM, han ampliado y sofisticado sus operaciones. Solo en los primeros meses de 2026 se registraron ataques coordinados contra bases militares, aeropuertos y puestos de seguridad, con especial incidencia en las regiones de Tillabéri, Tahoua, Dosso y Diffa. **Tillabéri se mantiene como una de las zonas más letales del Sahel central**. Además, el sureste del país, en la región de la cuenca del Lago Chad, también ha sufrido repetidos ataques de Boko Haram y su grupo disidente, la filial de ISIS en la Provincia de África Occidental (ISWAP), lo que ha puesto a prueba aún más a las fuerzas de seguridad de Níger.

Un hito significativo fue el **asalto al aeropuerto internacional y a la base aérea de Niamey** a finales de enero, una operación de alto perfil que evidenció la capacidad de los grupos armados para golpear infraestructuras estratégicas en la capital. El Ministerio de Exteriores ruso confirmó el apoyo de su unidad militar Africa Corps para repeler el asalto. Africa Corps es una estructura militar encuadrada dentro del ejecutivo ruso, creada para absorber y reestructurar las antiguas operaciones de la empresa de seguridad privada Wagner Group. Ataques similares se repitieron en Tahoua, donde los grupos de corte yihadista dañaron infraestructura de drones militares, lo que sugiere una estrategia deliberada

para debilitar las capacidades de vigilancia y respuesta del Estado. Ante esta situación, las autoridades militares han respondido con una escalada securitaria. A finales de 2025 decretaron **una movilización general** que autoriza la requisición de personas y bienes para la defensa nacional. En paralelo, el Gobierno ha institucionalizado grupos civiles armados de autodefensa, conocidos como **“Domol Leydi”**, integrándolos como fuerzas auxiliares del Ejército. Experiencias similares en Malí y Burkina Faso han estado asociadas a una mayor violencia contra civiles, lo que genera preocupación sobre una posible intensificación del conflicto interno.

En el plano político y social, Níger ha vivido movilizaciones en respaldo al Gobierno militar de transición. El 28 de marzo **un millar de personas se manifestaron en Niamey** y se produjeron otras movilizaciones en otras capitales de la AES contra una resolución del Parlamento Europeo que exigía la liberación del presidente depuesto Mohamed Bazoum. Las protestas denunciaron lo que se percibe como una injerencia extranjera y reafirmaron la soberanía nacional y regional. Estas movilizaciones ponen de manifiesto el clima de rechazo hacia Occidente, especialmente hacia Francia y la UE, tras la salida de Níger de la CEDEAO y la expulsión de fuerzas militares extranjeras. En contraste, el régimen ha profundizado su cooperación en materia de seguridad con Rusia, cuya presencia fue clave para repeler ataques recientes, **se está aproximando a EEUU** y ha reforzado la coordinación militar con Malí y Burkina Faso mediante una fuerza conjunta regional.

SAHEL OCCIDENTAL

HRW denuncia crímenes de guerra y lesa humanidad por todos los actores en conflicto en Burkina Faso

El Sahel se ha consolidado como la región más mortífera del mundo por parte de grupos armados con agendas yihadistas, concentrando casi la mitad de todas las muertes globales vinculadas a este fenómeno durante 2024 y 2025, según el Índice Global de Terrorismo 2026. Sin embargo, el impacto de la violencia va más allá de los grupos yihadistas. **Un reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW)**, titulado **“Nadie puede escapar”: Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Burkina Faso por todas las partes**” revela que los propios Ejércitos de Burkina Faso y Malí han matado casi tres o cuatro veces más civiles que los grupos yihadistas activos en la región. En Burkina Faso, HRW estima que el Ejército y sus milicias auxiliares –los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP)– fueron responsables del asesinato de alrededor de 1.255 civiles de los 1.800 registrados entre enero de 2023 y agosto de 2025, incluyendo una masacre de más de 400 personas en la ciudad de Djibo en diciembre de 2023. Asimismo, en Malí, las Fuerzas Armadas –con la participación de grupos paramilitares rusos como Wagner y Africa Corps–

mataron a 918 civiles en 2025, según datos de ACLED, en operaciones que incluyen un uso creciente y letal de drones en el norte del país.

En su informe, centrado principalmente en Burkina Faso, HRW determinó que todas las partes en conflicto son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos premeditados, ataques contra civiles y bienes civiles, saqueos y desplazamientos forzados. El informe concluyó que el presidente burkinés Traoré, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y seis altos mandos militares burkineses podrían ser responsables y deberían ser investigados. Asimismo, también Iyad Ag Ghaly, líder del JNIM –Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Grupo para el Apoyo al Islam y los Musulmanes)– buscado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes cometidos en Malí entre 2012 y 2013, y cuatro comandantes del JNIM podrían ser responsables y también deberían ser investigados. En respuesta, la Junta Militar burkinesa **reaccionó negando las cifras y rechazando las acusaciones de crímenes contra la humanidad.**

Frente a este escenario, desde hace años analistas locales advierten que la violencia estatal resulta contraproducente, ya que lejos de frenar el yihadismo, empuja a comunidades marginadas –especialmente a miembros de la etnia fulani– hacia las filas yihadistas, reforzando así la legitimidad de la filial de al-Qaeda-en la región (JNIM) y del Estado Islámico en el Sahel.

SENEGAL

La Asamblea Nacional aprueba un endurecimiento de la legislación contra la población LGTBIQ+

Senegal ha consolidado un drástico endurecimiento de su postura legal frente a la comunidad LGTBIQ+. El 11 de marzo la Asamblea Nacional de Senegal aprobó con una mayoría abrumadora (135 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones), **una ley que endurece significativamente las penas para actos homosexuales**, legalmente denominados “actos contra la naturaleza”. La ley duplica la pena máxima de prisión de cinco a diez años e introduce sanciones penales por la “promoción” de la homosexualidad con penas de hasta siete años por “financiar o promover la homosexualidad”. El 1 de abril el presidente Bassirou Diomaye Faye ratificó oficialmente la nueva ley, que redefine el panorama de los derechos humanos en el país.

El Gobierno del primer ministro Ousmane Sonko, impulsor de la iniciativa legislativa, defendió la misma como una protección de la soberanía y los valores tradicionales frente a la “influencia occidental”. Sin embargo, la oposición y diversos analistas sugieren que se trata de una maniobra populista para capitalizar la indignación pública tras investigaciones recientes contra su persona que involucraban a menores. Organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, han condenado la ley

como una violación “profundamente preocupante” de los derechos humanos y la dignidad personal. Además, el Consejo Nacional contra el SIDA (CNLS) y profesionales del Hospital Fann de Dakar advierten que el clima de persecución y estigmatización –que ya ha provocado más de 30 arrestos desde febrero– alejará a las poblaciones vulnerables del sistema sanitario, revirtiendo décadas de avances médicos. Uno de los puntos críticos que señalaron es el **riesgo de un brote de VIH/SIDA.**

Senegal se alinea así con una tendencia regional en el Sahel (junto a Malí y Burkina Faso), donde la movilización de grupos conservadores está reconfigurando el marco jurídico africano en conflicto directo con las normas globales de derechos humanos.

SOMALIA

Se agrava la situación en el país por la convergencia de la crisis política, la emergencia humanitaria y la creciente violencia

La situación en Somalia a comienzos de 2026 estuvo marcada por la convergencia de tres grandes crisis: un profundo conflicto político entre el Gobierno federal y varios estados regionales, una emergencia humanitaria acelerada por la sequía y la falta de fondos, y una creciente inseguridad provocada por la intensificación de las operaciones de alShabaab y el Estado Islámico en Somalia (ISSomalia).

En lo concerniente a la crisis política y la fragmentación institucional, la tensión entre el Gobierno federal y los estados miembros alcanzó niveles críticos. En marzo, **Suroeste se convirtió en el tercer estado, tras Puntlandia y Jubalandia, en romper relaciones con Mogadiscio**, denunciando interferencias en su seguridad interna y en su proceso político. El punto de inflexión llegó cuando, el 30 de marzo de 2026, **el Ejército nacional tomó el control de Baidoa**, la ciudad más importante de Suroeste. Esta intervención precipitó la dimisión del presidente regional, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, cuya reciente reelección había sido considerada ilegal por el Gobierno federal. La operación militar provocó desplazamientos de población, suspensión de actividades humanitarias y un clima de desconfianza entre autoridades regionales y centrales. Estas rupturas ponen en peligro la celebración de las elecciones nacionales previstas antes de mayo de 2026, ya que varios estados han rechazado el sistema electoral propuesto y han denunciado intentos de manipulación por parte del ejecutivo federal. Expertos advierten que si la fragmentación se profundiza el proceso electoral podría tornarse inviable.

Por otra parte, Somalia está enfrentando una de las peores crisis humanitarias de los últimos años, agravada por la sequía y la falta de fondos. Según **Naciones Unidas, 6,5 millones de personas**, un tercio de la población, padecen niveles de hambre de crisis o emergencia. Según la clasificación de Naciones Unidas, el Integrated Security

Phase Classification (IPC) se sitúa entre 3 y 4, y 1,8 millones de menores de cinco años sufren desnutrición aguda. La prolongada sequía –agravada por precipitaciones muy por debajo de lo normal durante la temporada de lluvias conocida como Deyr (octubre-diciembre 2025) y la severa temporada seca conocida como Jilaal (enero-marzo 2026)– ha devastado cosechas, reducido el rendimiento ganadero en todo el país y disparado los precios de alimentos y agua. El rendimiento cerealista en el sur es un 83% inferior al promedio histórico. Todo ello ha generado desplazamientos masivos y debilitado aún más los medios de vida. A esta crisis climática se suma una reducción significativa del financiamiento internacional, lo que ha obligado a las agencias humanitarias a recortar raciones y suspender programas esenciales de salud, nutrición y agua, pese al incremento de enfermedades como cólera, sarampión y difteria.

Por último, cabe destacar que la inestabilidad política está generando espacios que grupos insurgentes están aprovechando, lo que ha comportado una escalada del conflicto y la expansión de los grupos armados. En los últimos meses, **alShabaab ha intensificado sus ataques**, especialmente durante el mes de Ramadán, con asesinatos selectivos y atentados que han causado al menos 47 muertos solo en marzo. Además, el grupo ha reforzado su control en rutas estratégicas del sur y centro del país, imponiendo extorsiones y limitando la movilidad de civiles. Durante el año 2025 el grupo recuperó el control de **más de 60 pueblos y aldeas en el sur de Somalia**, en medio del fracaso de las operaciones contrainsurgentes lideradas por el Gobierno. Análisis señalan que las continuas divisiones entre las autoridades federales y regionales podrían acabar socavando aún más la coordinación en materia de seguridad, lo que permitiría al grupo consolidar y expandir su presencia.

AMÉRICA

HAITÍ: Decenas de actores políticos y sociales firman un pacto nacional para celebrar elecciones en la segunda mitad de 2026, las primeras en una década

HAITÍ

Decenas de actores políticos y sociales firman un pacto nacional para celebrar elecciones en la segunda mitad de 2026, las primeras en una década

A finales de febrero, decenas de partidos políticos y organizaciones sociales firmaron el “Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones”, que **reconoce** al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé como el único jefe del poder ejecutivo en la transición del país y faculta al Consejo de Ministros para gobernar hasta la celebración de elecciones y la toma de posesión de los nuevos funcionarios electos. El acuerdo encomienda al Gobierno la tarea de restablecer la seguridad, organizar elecciones –junto con el actual Consejo Electoral Provisional– e impulsar una reforma constitucional, incluyendo un referéndum que se celebrará paralelamente a la primera ronda de votación. El acuerdo también insta al Ejecutivo a reforzar la cooperación entre las fuerzas de seguridad nacionales y la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y pide la reactivación de la Comisión Nacional para el Desarme, el Desmantelamiento y la Reintegración. Varios Gobiernos y organizaciones internacionales que han apoyado la transición política en Haití en los últimos años, como **Naciones Unidas**, la Comunidad del Caribe y la Organización de los Estados Americanos, expresaron su respaldo al mencionado “Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones” por considerar que es un paso decisivo hacia la normalización institucional del país. Sin embargo,



Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas en Haití.
Fuente: ONU

varios partidos políticos expresaron su preocupación por la falta de controles efectivos sobre la autoridad de Fils-Aimé en el acuerdo y la ausencia de un límite de tiempo claro para su permanencia en el poder (el acuerdo no establece un plazo para la finalización del mandato del Gobierno en caso de que las elecciones no se celebren según el calendario previsto).

La firma de dicho acuerdo estuvo precedida por un período de inestabilidad institucional y enfrentamientos entre el primer ministro y el Consejo Presidencial de Transición (CPT), un órgano colegiado de siete personas (representando a distintos sectores sociales del país) que ejerció la jefatura del Estado entre 2024 y el 7 de febrero de 2026, fecha en la que expiró su mandato.

Ante la inminencia de tal fecha, en enero de 2026 varios miembros del CPT intentaron destituir al jefe del consejo, Laurent Saint-Cyr y, posteriormente votaron a favor de la destitución del primer ministro Fils-Aimé. Sin embargo, tanto EEUU como CARICOM, que ha ejercido tareas de facilitación del diálogo durante todo el proceso de transición en los últimos años, calificaron tales movimientos como inaceptables. En esta línea, pocos días antes del 7 de febrero, EEUU anunció restricciones de visado para cuatro miembros del CPT y **desplegó un destructor de misiles guiados y dos buques guardacostas** en la bahía de Puerto Príncipe, dejando claro que la medida tenía como objetivo disuadir los intentos de algunos miembros del CPT de destituir a Fils-Aimé y reemplazarlo por alguien que defendiera sus intereses.

Tras la firma del “Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones” a finales de febrero, en marzo se nombró a un **nuevo gabinete** de Gobierno y el Consejo Electoral estableció un calendario para las elecciones generales (presidenciales, legislativas –Senado y Cámara de Diputados– y locales y municipales) que fija la primera vuelta de las elecciones legislativas y presidenciales para el 20 de agosto, con una posible segunda vuelta y elecciones municipales para el 6 de diciembre. A mediados de marzo **trascendió** que más de 280 partidos y grupos políticos ya se han inscrito para participar en tales comicios, los primeros que se llevarán a cabo desde 2016.

En cuanto a la situación de seguridad, desde principios de año se intensificaron las operaciones terrestres y con ataques intensivos con drones por parte de la Policía, la GSF, contratistas privados extranjeros y grupos locales de autodefensa en áreas de cercanas a la capital controladas por pandillas, como Bel-Air, Delmas, La Saline o la ciudad de Arcahaie. En enero el Gobierno celebró los resultados de los operativos policiales y llegó a afirmar que estaba en marcha la recuperación de las áreas de la capital. Sin embargo, a pesar de la mayor agresividad y efectividad de los mencionados operativos conjuntos, Naciones Unidas declaró en marzo que las pandillas continuaban expandiéndose más allá de la capital. A finales de mes, por ejemplo, 70 personas fueron asesinadas, decenas de casas calcinadas y más de 6.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares tras una serie de **ataques coordinados** del grupo armado Gran Grif en el departamento de Artibonite. A principios de abril se desplegó **un contingente adicional de tropas chadianas en la Fuerza de Represión de Pandillas**, que llegó juntamente con el recién nombrado sudafricano Jack Christofides como Representante Especial de la GSF. Dicha misión, que fue autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en septiembre de 2025 y tiene un mandato inicial de 12 meses, se estima que pueda contar con unos 5.500 efectivos.

ASIA Y EL PACÍFICO

CHINA – FILIPINAS: Se reanudan las negociaciones para la reducción de las tensiones en el Mar de la China Meridional

FILIPINAS: Tras retrasos desde 2022, las primeras elecciones en la Región de Bangsamoro desde el acuerdo de paz de 2014 se realizarán en septiembre de 2026

PAKISTÁN – AFGANISTÁN: Ambos países acuerdan en China dialogar para una solución global al conflicto tras una escalada de la violencia sin precedentes

CHINA – FILIPINAS

Se reanudan las negociaciones para la reducción de las tensiones en el Mar de la China Meridional

A finales de marzo, tras más de un año de parálisis del diálogo, ambos Gobiernos **se reunieron** en la ciudad china de Quanzhou en el marco del del Mecanismo de Consulta Bilateral China–Filipinas sobre el Mar de China Meridional (BCM) para abordar la situación de creciente conflictividad entre los dos países en el Mar de la China Meridional y también para discutir la seguridad energética de la región y la exploración conjunta de hidrocarburos, en un contexto de interrupción de los suministros de petróleo y crisis energética global. Según ambos Gobiernos, durante la reunión se lograron **avances positivos** en ámbitos como la aplicación del derecho marítimo o la mayor comunicación

y el diálogo en la gestión de incidentes marítimos. Asimismo, China y Filipinas acordaron colaborar con otros países de la ASEAN para implementar plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de la China Meridional de 2002 y acelerar las negociaciones sobre el Código de Conducta en el Mar de la China Meridional. Según diversas fuentes, algunos de los **factores que han impulsado la reanudación del diálogo** (la última reunión formal se remonta a enero de 2025) fueron la asunción por parte de Manila de la presidencia rotatoria de ASEAN en el primer semestre de 2026 y también la propuesta de Filipinas a China de impulsar la exploración de yacimientos de gas y petróleo en un área en disputas entre los dos países en el Mar de la China Meridional y de incrementar la transferencia de petróleo y fertilizantes de China a Filipinas. A principios de marzo, antes de la reunión del Mecanismo de Consulta Bilateral, ambos

Gobiernos reconocieron la existencia de conversaciones en Beijing para explorar áreas de cooperación de interés mutuo, calificando tal diálogo como “abierto y franco”.

En paralelo al acercamiento entre ambos países, a finales de enero se llevó a cabo en Filipinas una Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN en la que **reafirmaron** su intención de concluir el Código de Conducta del Mar de China Meridional, que tiene por objetivo establecer normas de conducta para la gestión de incidentes en el Mar de China Meridional –donde China tiene reivindicaciones que se superponen con las zonas económicas exclusivas de Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunéi–, la reducción de los errores de cálculo y la prevención de la escalada en aguas en disputa entre Estados miembros de la ASEAN y China. En 2002, ASEAN y China aprobaron una Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de la China Meridional y se comprometieron a negociar un código de conducta, pero desde entonces las conversaciones al respecto se han visto paralizadas en numerosas ocasiones y han avanzado a un ritmo más lento del esperado. A principios de 2025 la ASEAN y China concluyeron la tercera y última lectura del borrador único, pero desde entonces aún **persisten varias incógnitas**, principalmente si el código de conducta será jurídicamente vinculante o no. Sin embargo, **a finales de 2025 el Gobierno de Filipinas anunció su intención de que tal Código de Conducta** se aprobara antes de la finalización de su presidencia rotatoria de ASEAN a finales de 2026. Según algunos análisis, la lentitud de las conversaciones está relacionada con el mecanismo de toma de decisiones por consenso en el seno de ASEAN, así como la creciente asertividad y agresividad de China en sus posiciones y en su conducta marítima en el Mar de la China Meridional. Cabe destacar que los Gobiernos de China y ASEAN se reunieron en los márgenes de la cumbre de la ASEAN a finales de enero para abordar, entre otras cuestiones, las disputas en el Mar de China Meridional.

A pesar de la reanudación del diálogo entre China y Filipinas y de los avances en el seno de ASEAN acerca del mencionado Código de Conducta, durante el trimestre se registraron numerosos **incidentes** entre ambos países. A modo de ejemplo, a finales de febrero China expresó su profundo malestar por los ejercicios conjuntos que Filipinas, Japón y EEUU realizaron entre Taiwán y Filipinas, los primeros de este tipo fuera del Mar de la China Meridional. Poco antes, Filipinas, Australia y EEUU habían llevado a cabo ejercicios militares conjuntos en la región y Manila había declarado que Filipinas y EEUU realizarían **más de 500 actividades militares y de seguridad** en 2026. A finales de enero, China declaró haber repelido aeronaves filipinas que habían invadido ilegalmente el espacio aéreo alrededor del arrecife de Scarborough, en disputa entre ambos países. El 18 de marzo, Manila informó que aeronaves de la Fuerza Aérea china desafiaron por primera vez a un avión patrulla cerca del arrecife de Scarborough, también en disputa. También en marzo, el Gobierno filipino **denunció** que un buque de la armada china había apuntado su radar de control de

tiro a un buque de la armada filipina cerca del arrecife de Sabina –en las islas Spratly, también en disputa–, calificando la acción de alarmante y provocadora.

FILIPINAS

Tras retrasos desde 2022, las primeras elecciones en la Región de Bangsamoro desde el acuerdo de paz de 2014 se realizarán en septiembre de 2026

A finales de marzo, el presidente Ferdinand Marcos **promulgó** la ley que programa las primeras elecciones de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (RABMM) para mediados de septiembre de 2026. Los comicios deberían haberse celebrado en la primera mitad de 2022, pero se habían pospuesto hasta en cuatro ocasiones por diferentes motivos, siendo el más reciente la decisión del Tribunal Supremo de excluir a la provincia de Sulu de la RABMM por entender que, en el plebiscito de aprobación de la Ley Orgánica de Bangsamoro en 2018, la mayor parte de la población de esa provincia había votado en contra de formar parte de la RABMM. Como resultado de dicha sentencia, los escaños correspondientes a la provincia de Sulu en el Parlamento de Bangsamoro quedaron vacíos, obligando ello a tener que realizar los ajustes institucionales y legislativos necesarios. Según la ley promulgada por el presidente Marcos en marzo, después de las elecciones de septiembre, las siguientes elecciones en Bangsamoro se celebrarán en mayo de 2031 –y cada tres años a partir de entonces– con el fin de sincronizarlas con las elecciones nacionales y locales de Filipinas. Numerosos análisis consideran que los comicios del mes de septiembre son fundamentales para la consolidación del proceso de paz en Mindanao, puesto que pondrán fin a la etapa de transición que se inició con el establecimiento de la RABMM en 2019. Desde entonces hasta 2026, la Autoridad de Transición de Bangsamoro había estado liderada por el MILF, puesto que su líder (Ebrahim Murad) era el jefe de Gobierno y el grupo designaba, según el acuerdo de paz, a 41 de los 80 escaños de la asamblea legislativa.

Aunque tanto los Gobiernos de Filipinas como de Bangsamoro y buena parte de los principales actores de la región celebraron que finalmente se fijara un calendario para las elecciones, **algunos análisis** han advertido sobre los riesgos que enfrentan tales elecciones. En primer lugar, por el deterioro de la confianza y las crecientes acusaciones cruzadas entre el MILF y el Gobierno. A modo de ejemplo, en marzo de 2025 el presidente Marcos proclamó a un alto dirigente del MILF, Abdulrauf Macacua (jefe militar del MILF y gobernador de Maguindanao del Norte) como Ministro Principal Interino de Bangsamoro en sustitución de Ebrahim Murad, líder del grupo. Además, Marcos decidió designar a solamente 35 de los 41 nombres propuestos por el MILF para la renovación del Parlamento de Bangsamoro, perdiendo la mayoría de la asamblea que estipulaba el acuerdo de paz de 2014. El MILF denunció que ambas decisiones, unilaterales y

sin consultas previas, suponían una intromisión en sus asuntos internos del MILF, y una violación tanto del acuerdo de paz de 2014 como de la Ley Orgánica de Bangsamoro. Más recientemente, la tensión entre ambas partes se volvió a incrementar a raíz de la dimisión en enero de 2026 del jefe del panel de implementación de la paz del Gobierno, el general retirado Cesar Yano, y de la decisión de Manila de no reemplazarlo desde entonces. A mediados de marzo, **el MILF puso fin temporalmente a la interlocución y comunicación de su panel negociador con el del gobierno** hasta que Manila no nombrara a una nueva persona para presidir el panel. Pocos días más tarde, el Third Party Monitoring Team –encargado de la supervisión de la implementación del acuerdo de paz– **advirtió** que el proceso de paz en general se encuentra en una coyuntura muy delicada como resultado de las continuas demoras y obstáculos e instó al Gobierno y al MILF a reafirmar su compromiso con los principios que en los últimos años habían sustentado el camino compartido hacia la paz. Anteriormente, dicho organismo ya había alertado que la confianza entre el Gobierno y el MILF se hallaba en su punto más bajo desde la firma del acuerdo de paz en 2014.

Además de la desconfianza entre Manila y el MILF y del creciente faccionalismo en el seno del grupo armado –distanciamiento entre Murad y Macacua, expulsión de algunos comandantes por no obedecer las directrices del Comité central del grupo, decisión de algunos miembros del MILF de **no concurrir a las elecciones bajo el partido impulsado por el MILF**, el UBPJ–, cabe recordar que todavía hay unos 14.000 combatientes del MILF que no han iniciado el proceso de desarme, desmovilización y reinserción previsto en el acuerdo de paz, y que el MILF paralizó tal proceso hasta que no se implementaran otros aspectos de dicho acuerdo como el apoyo socioeconómico o la amnistía a los ex combatientes –unos 26.000– que sí han iniciado tal proceso.

PAKISTÁN – AFGANISTÁN

Ambos países acuerdan en China dialogar para una solución global al conflicto tras una escalada de la violencia sin precedentes

Pakistán y Afganistán iniciaron conversaciones en China después de que entre febrero y marzo se produjera una importante escalada de la violencia entre los dos países. En febrero se produjeron una serie de atentados en Pakistán en los que este país acusó a Afganistán de ser el autor intelectual de los hechos. Un atentado suicida contra una mezquita chií en Islamabad causó la muerte de 38 personas y dejó heridas a otras 170 y en días posteriores se produjeron varios ataques contra las fuerzas de seguridad en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que causaron la muerte de al menos 13 militares. Como consecuencia de todos estos atentados, **las fuerzas de seguridad pakistaníes llevaron a cabo ataques contra supuestas bases del TTP en territorio afgano** en las provincias de Paktika y Nangarhar. Esta escalada de la

violencia representó el colapso del acuerdo de alto el fuego que se había alcanzado en el mes de octubre, cuya fragilidad había quedado manifiesta desde que se pactó entre Afganistán y Pakistán.

El Gobierno pakistaní reiteró la acusación de complicidad entre los talibanes pakistaníes y el Gobierno talibán afgano, como viene haciendo en los últimos años. Esta complicidad se haya en el epicentro de la crisis entre ambos países y Pakistán atribuye el crecimiento de la insurgencia talibán pakistaní al apoyo afgano en múltiples ámbitos al TTP, lo que ha permitido su fortalecimiento. Pakistán afirmó que en los ataques que había llevado a cabo contra instalaciones del TTP y de ISIS habían muerto más de 300 insurgentes, sin que hubiera una confirmación independiente de la cifra. Pakistán buscaba dismantlar las infraestructuras de la insurgencia talibán a lo largo de la frontera y llevó a cabo ataques contra más de 50 emplazamientos, en una operación militar a gran escala. **En esta operación también se atacó infraestructura afgana** que Pakistán considera que sirve de apoyo a la insurgencia talibán para su actividad, lo que representa un escalada en el deterioro de las relaciones entre los países vecinos y una afirmación más explícita, por parte de Pakistán, de los vínculos entre la insurgencia talibán y el Gobierno afgano. Por su parte, Afganistán denunció que se trataba de emplazamientos civiles en los que habían muerto decenas de personas, incluyendo mujeres y niños, mientras que la misión de Naciones Unidas en el país, la UNAMA, confirmó la muerte de 13 civiles como consecuencia de los bombardeos aéreos que tuvieron lugar el 21 de febrero. Esta acción de Pakistán motivó una respuesta por parte de las fuerzas talibanes de Afganistán que tuvo como escenario las provincias de Kunar, Nangarhar, Nuristan Paktia y Khost, que a su vez llevó a que Pakistán iniciara operaciones terrestres y aéreas en Kandahar y Kabul y en la provincia de Paktia. Se trataba de la primera vez que Pakistán llevaba a cabo operaciones militares contra centros urbanos en Afganistán, incluyendo la capital. Ambos países se atribuyeron numerosas muertes del bando contrario y los ataques persistieron durante varios días. El 16 de marzo se produjo el episodio más grave y que supuso un punto de inflexión en la escalada bélica entre los dos países, cuando **Afganistán acusó a Pakistán de haber llevado a cabo un ataque contra un centro de desintoxicación de personas tóxicómanas en el que según el Gobierno talibán habrían muerto 400 personas**. Pakistán señaló que únicamente había llevado a cabo ataques contra instalaciones insurgentes y negó las acusaciones. Por su parte, la UNAMA señaló que se había registrado la muerte de 75 civiles y que otras 193 personas habían resultado heridas desde la reanudación del conflicto a finales de febrero.

La escalada de la violencia activó la diplomacia de varios países de la región, que ya se habían involucrado previamente en la mediación entre ambos. El 18 de marzo ambos países anunciaron una tregua de cinco días con motivo de la celebración de la festividad religiosa musulmana de Eid al-Fitr y que se produjo en respuesta a

las peticiones de Qatar, Arabia Saudí y Türkiye, que había facilitado el alto el fuego pactado en octubre de 2026. A principios de abril, Afganistán y Pakistán señalaron que estaban llevando a cabo conversaciones en la ciudad china de Urumqi, con el objetivo de acordar un alto el fuego que pusiera fin a varias semanas de ataques mutuos. Pakistán calificó las negociaciones de “conversaciones de trabajo” y Afganistán señaló que había enviado una delegación de nivel medio. Previamente al inicio de las negociaciones, China había nombrado un enviado especial en febrero que no logró el acuerdo, ya que con posterioridad a su nombramiento Pakistán llevó a cabo el ataque contra instalaciones sanitarias afganas que se saldó con un número elevado de fallecidos.

A pesar de los obstáculos, las dificultades y la escalada de la violencia que había precedido al inicio de las conversaciones, así como el grave deterioro de las relaciones entre Afganistán y Pakistán que se remonta a la toma del poder en Afganistán por los talibanes en

2021, el Gobierno afgano calificó las conversaciones de útiles y constructivas. **Algunos análisis resaltaron que la mediación de China, llevada a cabo fuera del foco mediático, representaba una oportunidad** para la reconstrucción de las relaciones entre los países vecinos y la reducción de la violencia. No obstante, cabe señalar que intentos previos de acercamiento tanto entre los Gobiernos de Pakistán y de Afganistán, como entre el Gobierno pakistaní y la insurgencia talibán pakistaní del TTP han fracasado, llevando a escaladas de la violencia de cada vez más intensidad. En esta ocasión, **China señaló que las partes habían acordado buscar una salida global al conflicto**, así como no llevar a cabo acciones que pudieran dar lugar a una nueva escalada de la violencia, un camino diferente al que se llevó en anteriores ocasiones en las que la mediación de Qatar, Türkiye y Arabia Saudí buscó un alto el fuego. No obstante, no han trascendido muchos detalles sobre el transcurso de las conversaciones, que tuvieron lugar entre el 1 y el 7 de abril, una cita de mayor duración que anteriores encuentros.

EUROPA

CHIPRE: Nuevos contactos entre los líderes grecochipriota y turcochipriota

TÜRKIYE (PKK): El proceso de paz avanza con dificultades, demandas de más concreción y un contexto inestable

CHIPRE

Nuevos contactos entre los líderes grecochipriota y turcochipriota

El proceso de paz de Chipre asiste a un nuevo impulso diplomático orientado a promover el reinicio del proceso negociador, estancado en los últimos años en el nivel de los máximos líderes políticos y solo operativo en niveles inferiores y en formatos informales. No obstante, se estaría en una fase preparatoria, que requerirá tiempo para generar avances significativos. El reimpulso responde a un nuevo esquema, apoyado por la ONU, de promover encuentros directos entre los dos líderes sin la ONU u otros intermediarios, con el fin de generar confianza, trabajar propuestas, demostrar voluntad de cambio del statu quo en beneficio de ambas comunidades y favorecer un posible reinicio de las negociaciones en un periodo posterior. En paralelo a todo ello, la ONU asume que las partes requieren tiempo en el corto plazo para, en el caso de la República de Chipre, coordinar la presidencia del Consejo de la UE y afrontar las elecciones parlamentarias internas de mayo y, en el caso del tercio norte de la isla (autoproclamada República Turca del Norte de Chipre), para la adopción del nuevo líder (elegido en los comicios de octubre y con una visión diferente que su predecesor sobre el conflicto) y su coordinación con otros actores, incluyendo Türkiye, en el recién asumido nuevo mandato.

En el marco de este reimpulso se produjeron diversas reuniones en los últimos meses. La última de ellas, una reunión bilateral entre el líder grecochipriota, Nikos Christodoulides, y el líder turcochipriota, Tufan Erhurman, el 8 de abril en la residencia del representante especial en Chipre del Secretario General de la ONU, Khassim Diagne, en Nicosia –sin facilitación ni bajo los auspicios de la ONU. Según un **comunicado posterior de la ONU**, la reunión tuvo lugar en un clima positivo y con discusión fructífera. Los líderes intercambiaron visiones sobre cuestiones sustantivas del proceso y sobre vías de avance, así como también sobre la implementación de medidas de confianza y retos pendientes en ese ámbito, y se comprometieron a una nueva reunión a finales de abril en la que podrían producirse anuncios concretos sobre medidas de confianza, según el comunicado.

Previamente a la reunión de principios de abril, Christodoulides y Erhurman mantuvieron reuniones por separado con el secretario general de la ONU (18 de marzo en Bruselas y 11 de febrero en Nueva York, respectivamente) y otra entre ambos el 24 de febrero en Nicosia. La reunión fue calificada de “abierta y honesta” **por Christodoulides**, y de “una de las más abiertas y sinceras” **según Erhurman**. Asimismo, se reunieron el 28 de enero **conjuntamente con la enviada especial**

del secretario general de la ONU, María Ángela Holguín (precedida de reuniones de Holguín con los negociadores jefe de ambos líderes y de reuniones de la enviada por separado con cada líder). El 17 de enero habían tenido otra reunión trilateral preparatoria, sin comunicados posteriores. En un [artículo público en febrero](#), Holguín explicó el nuevo esquema de acercamientos directos, así como su voluntad como enviada especial de mantener nuevos encuentros con otros sectores de la isla.

En conjunto se asiste a un cierto contexto de ventana de oportunidad a medio plazo. Entre los factores favorables se incluyen, entre otros, la exploración del nuevo esquema de contactos directos sin intermediación de la ONU, aunque con apoyo del organismo al conjunto del proceso, que puede incrementar la confianza y responsabilización del liderazgo local para lograr avances; la elección de un nuevo liderazgo turcochipriota y partidario de una solución de reunificación frente a la opción de dos Estados defendida por su predecesor, Ersin Tatar, y por Turquía; el involucramiento multi-sector y multinivel de la enviada especial del secretario general de la ONU; la voluntad de Guterres de impulsar el reinicio del proceso negociador antes de que finalice su mandato como secretario general de la ONU en diciembre de 2026; o el empuje de organizaciones sociales por innovar en el proceso de diálogo, como la [propuesta del Centro de Chipre para la Paz y el Diálogo \(CPDC\)](#) sobre un organismo consultivo para el involucramiento de la sociedad civil. No obstante, el proceso de paz acumula experiencias previas de anteriores intentos y etapas de *momentum* diplomático que no han logrado generar resultados. Algunos análisis señalaron [factores que pueden ralentizar](#), como las resistencias hasta ahora por el liderazgo grecochipriota en aceptar cuestiones relativas a reparto de poder o igualdad política, los retos en política interna en el tercio norte turcochipriota, la posición de Turquía y dinámicas de inestabilidad regional, entre otros.

Por otra parte, el reimpulso diplomático tiene lugar sobre un trasfondo de contexto regional en escalada, derivado de los ataques de EEUU e Israel contra Irán que dieron paso a una nueva guerra entre las partes, y sus impactos en otros territorios. La base militar británica de Akrotiri en Chipre fue atacada con un dron de fabricación iraní –sin víctimas y daños “mínimos”–, ataque que según una agencia chipriota citada por [The Guardian](#) habría procedido de Hezbollah en Líbano, sin confirmación por Reino Unido. Análisis señalaron la dimensión de [advertencia estratégica](#) del incidente y la exposición geopolítica de Chipre por su proximidad geográfica a Oriente Medio y por la infraestructura militar que acoge, con dos bases militares británicas consideradas “hubs logísticos y de vigilancia para operaciones occidentales” en esa región.

TÜRKIYE (PKK)

El proceso de paz avanza con dificultades, demandas de más concreción y un contexto inestable

El proceso de diálogo iniciado en 2024 entre Türkiye y el PKK avanza con nuevos pasos en los últimos meses, pero continúa afectado por la inestabilidad regional y factores internos. Entre los pasos recientes, la Comisión parlamentaria con mandato relativo al proceso de paz emitió y aprobó su informe final de propuestas el 21 de febrero, aprobado con 47 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. El partido pro-kurdo DEM votó a favor, aunque expresando reservas. [El texto](#), que no es vinculante, recomienda, entre otros elementos, establecer un marco legal para regular el desarme y la disolución del PKK y mecanismos legales para el retorno de excombatientes; modificar la ley antiterrorista y código penal para no perseguir acciones de no violencia y discursos que deberían estar amparados por la libertad de expresión; revisar condenas por “propaganda terrorista”; garantizar el cumplimiento de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (indirectamente abriendo puerta a revisar la condena de Öcalan); y cambios en la política del Gobierno de revocación de alcaldías electas.

Tras la aprobación del informe, la responsabilidad de debatir y transformar las propuestas en reformas legislativas pasa a la Asamblea Parlamentaria. El presidente de Türkiye, [Recep Tayyip Erdogan](#), afirmó que se iniciarían las discusiones parlamentarias sobre los aspectos legales de la nueva fase del proceso. [Medios progubernamentales](#) señalaron a finales de febrero que el informe de la comisión no plantea la entrega previa de todas las armas como condición para iniciar reformas



Miembros de la “delegación Imrali” del partido DEM, Pervin Buldan y Mithat Sancar. Fuente: Bianet

legales relativas a la integración de combatientes, pero sí un cierto umbral en el desarme. Dichos medios señalaban que el Ministerio de Defensa y los servicios de inteligencia (MIT) –organismos que supervisan el desarme– presentarían una evaluación conjunta a Erdogan relativa a la situación sobre el desarme del PKK, tras lo cual se esperaba que el presidente designe un organismo o mecanismo específico para supervisar la siguiente fase.

En los primeros meses del año **análisis señalaron la fragilidad** en el proceso de paz y alertaron de bombardeos por Turquía contra una localidad en el norte de Iraq y la movilización militar de ambas partes en la región. Analistas señalaron falta de transparencia y de avances en materia de desarme tanto por el Gobierno como por el PKK, en un contexto regional en que ambas partes evaluaban los desarrollos de las crisis en Siria e Irán y los riesgos de estas para sus posiciones y agendas. En Siria, una ofensiva militar de finales de 2025 y principios del 2026 del Gobierno sirio contra las milicias kurdas del nordeste del país, las YPG/YPJ –aliadas del PKK–, causó en los primeros meses de 2026 una grave crisis humanitaria, la retirada de las milicias de amplias áreas anteriormente bajo su control y desembocó en un acuerdo anunciado el 30 enero que incluye la integración de las instituciones políticas y militares de la Administración autónoma del norte y este en su formato anterior (AANES, popularmente conocida como Rojava) en las estructuras del Estado sirio. Según medios progubernamentales turcos, tras la ralentización del desarme del PKK por la crisis en el país vecino, el acuerdo de finales de enero en Siria dio paso a una reanudación de evacuación de cuevas y entrega de armas por el PKK. No obstante, no trascendieron detalles al respecto. Además, el inicio de la guerra en Irán por los ataques de EEUU e Israel contra el país añadió nueva incertidumbre y riesgos de nuevos retrasos. Tales desafíos se deben a la influencia que la evolución en Irán pueda tener sobre las posiciones de Türkiye –país en creciente crisis con Israel y que considera a **Teheran rival pero no**

amenaza existencial– y el PKK –actor con ascendencia sobre el grupo armado opositor kurdo iraní PJAK– al respecto de esa guerra y, por contagio, del proceso de diálogo en Türkiye. **El PKK se posicionó** en contra de la guerra en Irán y rechazó tomar parte por EEUU e Israel o por Irán. Varios misiles que Ankara denunció procedían de Irán fueron interceptados en el espacio aéreo turco por sistemas de defensa de la OTAN.

En tal contexto de incertidumbre y ralentización del proceso de paz, actores políticos y sociales del movimiento kurdo han reclamado celeridad y concreción en el proceso de paz. **El partido prokurdo DEM emitió** junto a otras organizaciones una declaración a finales de marzo en que señalaron que el proceso no podía avanzar con promesas vagas y reclamaron medidas tangibles, como el fin de la práctica gubernamental de destitución de alcaldes y alcaldesas y la reincorporación de los cargos electos, sin necesidad de nuevos mecanismos legales; la implementación inmediata de las sentencias del TEDH; la mejora de las condiciones de detenidos y presos, dentro del marco legal ya existente; la finalización de las “operaciones judiciales contra partidos opositores”; y la aceleración del trabajo parlamentario para la aprobación de medidas legislativas relativas a paz y democratización. Durante el primer tercio del año se produjeron nuevas visitas de la delegación del partido prokurdo DEM al líder del PKK, Abdullah Öcalan –en prisión desde 1999–, como parte del esquema de diálogo del proceso (reuniones de 17 de enero, 16 de febrero y 27 de marzo), y reuniones de la delegación con actores políticos. Tras la visita del 27 de marzo de la “delegación de Imrali”, Öcalan afirmó que el periodo de conflicto armado quedaba atrás y que no habría vuelta al pasado. También reclamó vías medidas para poderse comunicar de manera directa con el público de Türkiye. En otra declaración, la del 27 de febrero –con motivo del **1er aniversario** de su histórico llamamiento en 2025 al fin de la lucha armada–, Öcalan enfatizó la vía de la “integración democrática” para la que reclamó un marco legislativo.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.

